

43ª REUNION — 34ª SESION ORDINARIA — 23 DE SEPTIEMBRE DE 1949 (Mañana)

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y del señor Roberto Dri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
 ALVAREZ PEREYRA, Manuel
 ALLUB, Rosendo
 ARAOZ, Ricardo E.
 ARGANA, José M.
 ASTORGANO, José
 ATALA, Luis
 AYALA LÓPEZ TORRES, Francisco
 BAGNASCO, Vicente
 BALBIN, Ricardo
 BENITEZ, Antonio J.
 BERETTA, Eduardo
 BERNARDEZ, Manuel
 BIDEGAIN, Oscar E.
 BONAZZOLA, Romeo E.
 BONINO, Alberto C.
 BRUGNEROTTO, Juan N. D.
 BUSTOS FIERRO, Raúl
 BUTTERFIELD, Humberto
 CAMPORA, Héctor J.
 CAMUS, E. P.
 CANDIOTTI, Alberto M.
 CANÉ, José
 CARRERAS, Ernesto A.
 CASAS NOBLEGA, Armando
 CATTANEO, Atilio E.
 COLOM, Eduardo
 CONTE GRAND, José Amadeo
 COOKE, John William
 CORDOVA, J. Salvador
 CUFRE, Orlando H.
 CURSACK, Roberto Enrique
 DAVILA, J. Aníbal
 DECKER, Rodolfo A.
 DEGREEF, Juan Ramón
 DE LA TORRE, Juan
 DEL CARRIL, Emilio Donato
 DEL MAZO, Gauriel
 DELLEPIANE, Luis
 DE PRISCO, Guillermo
 DÍAZ, Carlos A.
 DÍAZ, Manuel M.
 DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
 DRI, Roberto
 ERRO, Saturnino S.
 ESTRADA, Angel C.
 FERNANDEZ, Hernán S.
 FERRANDO, Manuel P.
 FERRER, Modesto
 FILIPPO, Virgilio M.
 FORTEZA, Eduardo Julio
 FREGOSI, Luis J.
 FRONDIZI, Arturo

GARAGUSO, Bernardino Hipólito
 GARAY, Marcelino S.
 GARCÍA, Manuel
 GIL FLOOD, Mario
 GONZALEZ FUNES, Tomás
 GUARDO, Ricardo C.
 HARAMBOURE, Horacio
 IBARGUREN, Prudencio M.
 ILLIA, Arturo U.
 LAGRAÑA, Héctor D.
 LAREO, Ricardo
 LASCIAR, Guillermo F.
 LAVIA, Ludovico
 LELOIR, Alejandro H.
 LEMA, Manuel E.
 LETAMENDI, Balbino (h.)
 LICEAGA, Félix J.
 LÓPEZ SERROT, Oscar
 LUCINI, Raúl Felipe
 MAC KAY, Luis E.
 MAINERI, D. Jacinto
 MALDONADO LARA, José María
 MANTARAS, Manuel J.
 MARIATEGUI, Angel S.
 MARINI, Angel C.
 MAROTTA, José
 MARTINEZ GUERRERO, Guillermo
 MARTINEZ LUQUE, Enrique
 MERCADER, Emir E.
 MESSINA, Humberto
 MIEL ASQUÍA, Angel J.
 MONJARDIN, Federico F.
 MONTES, Abel
 MONTES, Juan Manuel
 MONTES DE OCA, Carlos
 MONTIEL, Alcides E.
 MORENO, José Luis
 NORIEGA, Juan J.
 NOVELLINO, Francisco
 OSINALDE, Rara
 OTTONELLO, Benito J.
 PALACIO, Ernesto
 PASQUALI, Juan Domingo
 PASQUINI, José P. D.
 PASTOR, Reynaldo A.
 PEREA, Pedro J.
 PEREYRA, Luis Alberto
 PÉREZ MARTÍN, José
 PIRANI, Antonio S.
 PONCE, Angel L.
 PONTIERI, Silverio
 RABANAL, Francisco
 REPETTO, Agustín
 REYNES, Leandro E.
 ROCHE, Luis Armando
 RODRÍGUEZ, Manuel

RODRIGUEZ DE LA TORRE, Raúl
 ROJAS, Absalón
 ROSSI, José
 RUDI, Ricardo
 RUMBO, Eduardo I.
 SANCHEZ, Pedro
 SAN MILLAN, Ricardo Antonio
 SANTANDER, Silvano
 SAVORITI, Luis
 SARAVIA, Teodoro S.
 SARMIENTO, Manuel
 SEEGER, Carlos Manuel
 SILVESTRE, Adolfo J. B.
 SOBRAL, Antonio
 SOLA, Fernando
 TEJADA, Ramón Washington
 TILLI, Pedro
 TOMMASI, Victorio M.
 TORO, Ricardo
 TREBINO, Natalio
 URANGA, Raúl L.
 URTIAGA BILBAO, Mateo de
 VALDEZ, Celestino
 VANASCO, Julio A.
 VAREA, Isidoro
 VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
 VERGARA, Amado
 VILLACORTA, Luis René
 VILLAFANE, José María
 VISCA, José Emilio
 VISCHI, Albino
 VITOLO, Alfredo R.
 YADAROLA, Maurício L.
 ZAMUDIO, Juan Carlos
 ZANONI, Pedro P.
 ZAVALA ORTIZ, Miguel Angel

AUSENTE, CON AVISO:

ROUGGIER, Valerio S.

AUSENTE, SIN AVISO:

BRUNO, Domingo

AUSENTES, CON LICENCIA:

CLEVE, Ernesto
 FAJRE, José Benito
 MACHARGO, Alfredo F.
 PIEROTTI, Mario
 RICAGNO, Roberto
 RODRIGUEZ, Nerio M.
 ROJAS, Nerio
 STINCO, Luis A.

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Izamiento de la bandera nacional.

3.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones oficiales.

III.—Comunicaciones de comisión.

IV.—Peticiónes particulares.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Rossi: pensión a la señora Ambrosia Porchets de Aibé e hijos.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado Lucini y otros, por el que se establece que el estrecho situado entre Tierra del Fuego y la Antártida Argentina se denominará **Mar de Piedrabuena**.VII.—Proyecto de ley del señor diputado Lucini: construcción de un monumento al general San Martín en la ciudad de **Alta Gracia**, provincia de Córdoba.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Lucini: subsidio para obras, al Club Atlético Sportivo Alta Gracia, de Alta Gracia, provincia de Córdoba.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Lucini: subsidio para obras, al Club Atlético Colón, de Alta Gracia, provincia de Córdoba.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Filippo: instalación de un vivero de los vástagos del pino del convento de San Carlos, de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Velloso Colombres: expropiación de un inmueble con destino al **Colegio Nacional número 10**, José de San Martín, en la Capital Federal.XII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Martínez Guerrero: designación con el nombre de **Honorio Pueyrredón** a la ruta nacional número 5 de Vialidad Nacional.

XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: pensión a la señorita María Loreta Castagnani.

4.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Rojas (N.) y Ricagno.

5.—Consideración del proyecto de resolución por el que se dispone la designación de una comisión encargada de redactar un proyecto de ley sobre **industria azucarera**.

6.—Integración de comisiones.

7.—Moción del señor diputado Rojas (A.) de preferencia para el proyecto de ley sobre conmemoración del **cuarto centenario** de la fundación de la ciudad de **Santiago del Estero**; pedido de pronto despacho del proyecto de ley por el que se determinan los efectos de la **disolución del matrimonio** en el extranjero.

8.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara; fijación de días y horas de sesión.

9.—Indicación del señor diputado Candiotti de que se autorice a la Comisión de Asuntos Extranjeros y de Culto a producir despacho en el proyecto de pedido de informes sobre **política internacional de la República**.10.—Moción del señor diputado Ferrer de preferencia para el proyecto de ley sobre **estatuto de médicos**.11.—Continúa la **consideración** del despacho, producido por la Honorable Cámara constituida en comisión, en el proyecto de **ley orgánica de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación**. Se sanciona.

12.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara.

—En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de septiembre de 1949, a la hora 9:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Fregossi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fregossi. — Hago indicación de que se siga llamando hasta obtener quórum.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se seguirá llamando.

Sr. González Funes. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Cámpora). — Sí, señor diputado.

Sr. González Funes. — ¿Cuántos diputados hay en la casa?

Sr. Presidente (Cámpora). — En la casa hay 90 señores diputados.

—A la hora 9 y 15:

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

a fin de que el Poder Ejecutivo venga a esta Honorable Cámara para informarla sobre asuntos de política internacional.

Los problemas de la política internacional son de suma importancia y deben ser aclarados con toda franqueza y libremente en esta Cámara, como se hace en los parlamentos del mundo. Tanto en Europa como en el continente americano, en los Estados que tienen una enorme responsabilidad en la seguridad de la paz y en la conducción de la guerra, las cuestiones internacionales se debaten libremente en sus respectivos congresos, y los representantes de los gobiernos son los primeros en acudir a los parlamentos a informar respecto a las relaciones internacionales.

Nosotros, como representantes del Partido Radical, queremos saber cómo se conduce la política internacional del gobierno argentino; cómo está representado el país, cómo ejercen la función diplomática y consular los funcionarios argentinos destacados en el exterior, y queremos conocer, también, si se cumple con fidelidad la ley diplomática sancionada últimamente por esta Cámara, que fué totalmente modificada a indicación minuciosa del diputado que habla, cuando este cuerpo consideró la sanción que vino del Senado.

Hay muchos aspectos que deben ser considerados en la política internacional, para que las naciones hermanas del continente —y nuestro pueblo— vean claro en la conducta de nuestra política internacional.

Ultimamente el pueblo argentino se ha enterado, con dolorosa sorpresa, de que son frecuentes las reclamaciones entabladas ante nuestra cancillería por parte de gobiernos de naciones vecinas...

Sr. Bagnasco. — Serán frecuentes, pero no justas.

Sr. Candiotti. — Es, pues, urgente que venga el representante del Poder Ejecutivo a informar a la Cámara y al país sobre diversos aspectos de la política internacional, en lo político, así como también en sus directivas económicas y comerciales. Es un problema cuya consideración se hace impostergable; pero me temo no tener buen éxito en este pedido, porque ahora, al llegar al final el período, recién se me brinda la posibilidad de solicitar que se trate este asunto.

En síntesis, ruego a la Honorable Cámara que autorice a la Comisión de Asuntos Extranjeros para hacer despacho en el proyecto a que me he referido.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar si se autoriza a la Comisión de Asuntos Extranjeros a formular despacho en el proyecto de resolución a que ha hecho referencia el señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa de 50 votos; votan 81 señores diputados.

10

MOCION

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferrer. — Ignoraba que me correspondiera hablar en este momento, de este asunto de tanta importancia, y lamento no tener los elementos que obran en mi poder para poder ampliar los fundamentos del pedido que voy a formular.

Se trata del estatuto de médicos, en el cual hemos trabajado intensamente en la comisión respectiva por espacio de dos meses. El autor del proyecto que deseamos considerar es un integrante del sector mayoritario, el señor diputado Zamudio. Luego de numerosas consultas y de presentaciones de varias entidades, hemos llegado a uniformar criterio y a concretar un proyecto que creemos satisface las aspiraciones del gremio médico y actividades afines.

El gremio de médicos y afines es uno de los que menos ventajas ha obtenido, a tal punto que no obstante la intensa actividad que desarrollan perciben sueldos mínimos que no compensan su labor. Existen reglamentaciones en el orden municipal y nacional que exigen a los médicos 18 horas de trabajo y las remuneraciones actuales oscilan entre 375 y 425 pesos. Basta enunciar estas sumas para comprender que la remuneración es ínfima frente a las grandes responsabilidades que tienen los médicos en el orden científico.

El legislador que he mencionado, representante del sector mayoritario, ha tomado como base para el proyecto el estatuto y escalafón sancionado en la provincia de Buenos Aires, el cual ha encontrado buena acogida en el sector de la Unión Cívica Radical.

Creo que atenderíamos una justa aspiración del gremio médico y actividades afines, si antes de la terminación del actual período parlamentario se fijara una fecha que podría ser el martes próximo o las sesiones subsiguientes. Se cumpliría así una aspiración que creo es justa.

— Suena la campanilla indicadora de que ha vencido la media hora destinada a consultas, mociones de preferencia y pedidos de pronto despacho.

Sr. Presidente (Dri). — Ha terminado la media hora destinada a consultas, mociones de preferencia y pedidos de pronto despacho. El señor diputado podrá continuar su exposición en la próxima sesión.

11

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Sr. Presidente (Dri). — Se va a pasar a la orden del día.

Continúa la consideración del proyecto de ley orgánica de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación (1).

Corresponde votar el artículo 29 del despacho adoptado por la Honorable Cámara constituida en comisión.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 30 del despacho producido por la Cámara en comisión, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Brugnerotto. — Hago indicación de que se suprima la lectura de los artículos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Dri). — Habiendo asentimiento, se suprimirá la lectura de los artículos. Se va a votar el artículo 30.

—Resultado afirmativa de 66 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 31.

Se ha propuesto una modificación, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En la mesa de la Secretaría hay una modificación a este artículo —no consta en la planilla correspondiente el nombre del señor diputado autor de la misma— que consiste en agregar después de las palabras «establecimientos industriales» las siguientes: «comerciales o entidades de cualquier orden»; y después de las palabras «cuyos dueños», las siguientes: «o responsables».

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar el artículo 31 del despacho producido por la Cámara en comisión.

—Resultado afirmativa de 64 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Se van a votar los agregados de que se ha dado cuenta por Secretaría.

—Resultado afirmativa de 42 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Brugnerotto. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a rectificar la votación.

—Resultado negativa de 55 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 32 del proyecto de ley.

Por Secretaría se va a dar cuenta de un agregado propuesto en las mismas condiciones que el artículo anterior.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Consiste en agregar, después de la palabra «vigilancia» lo siguiente: «necesaria para impedir el vertimiento de líquidos residuales en las corrientes de agua en las localidades...» y sigue el resto del artículo.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar el artículo 32.

—Resultado afirmativa de 44 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar el agregado que se ha leído por Secretaría.

—Resultado negativa de 48 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 33.

Se va a votar.

Sr. Rabanal. — Pido que se lea previamente el artículo.

Sr. Presidente (Dri). — Hace un instante se ha hecho indicación de suprimir la lectura de los artículos, y no hubo oposición. Pero no hay inconveniente en que se lean.

Por Secretaría se dará lectura al artículo 33 del proyecto de ley.

—Se lee.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 43 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 34.

Por Secretaría se dará lectura del artículo.

—Se lee.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Voy a dejar constancia de nuestra oposición a este artículo.

Es ya característica señalada por la legislación del nuevo régimen peronista, la de ir confundiendo funciones judiciales con las meramente administrativas, y es también una característica la de delegar en funcionarios administrativos facultades que corresponden esencialmente al Poder Judicial.

Por este artículo se autoriza a imponer multas que son de una cuantía extraordinaria, que no son simples multas de carácter administrativo, tendientes a asegurar la eficacia en la gestión administrativa del Estado, que no son peque-

(1) Véase el proyecto de ley en la página 3331.

ñas sanciones contra el que se resiste a cumplir una obligación impuesta por la ley en beneficio colectivo. Se trata de verdaderas penas que han de ser aplicadas por el jefe de una oficina o repartición administrativa, con el agravante mayor de que para esas penas, que importan la aplicación de una sanción gravísima, no se establezca ningún recurso posible.

Creo que sin preconceptos de orden político y sin demasiada adhesión a una orientación institucional, de la que mañana tendrán que arrepentirse todos los que hoy la apoyan, conviene que vayamos pensando seriamente en la necesidad de mantener la separación de los poderes del Estado, de dejar que el Poder Judicial desempeñe su función específica de aplicar penas y que el poder administrador tan sólo aplique sanciones por faltas leves, de tal manera que no lleguemos al extremo de delegar funciones judiciales en simples jefes de reparticiones administrativas.

Esto es de una gravedad extrema, y debo señalarlo el hecho y nuestra oposición a este artículo.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Casas Noblega. — Nuevamente el señor diputado Yadarola incurre en una *gaffe* jurídica extraordinaria.

Si nos vamos a referir a las penas de acuerdo a lo que establece el Código Penal, sabemos que en el mismo se determina una gradación, que es la siguiente: reclusión, prisión, inhabilitación y multa. Esta multa puede ser aplicada por un juez, por ser competencia de la justicia del crimen, pero hay multas de carácter netamente civil, y éstas son las que establece el proyecto, que las aplica la autoridad administrativa.

Es una *gaffe* jurídica en que ha incurrido el señor profesor Yadarola, quien ya otra vez incurrió en otro error al decir que la persona por nacer tenía derechos y obligaciones. Eso no es así: las personas por nacer solamente pueden adquirir derechos, como, por ejemplo, ser herederos testamentarios; pero no contraer obligaciones. Vamos a votar el artículo tal cual está.

Sr. Yadarola. — El señor diputado ha aprovechado para hacer un descargo y demostrar que alguna cosa ha leído sobre persona jurídica. Pero ha olvidado advertir que las personas jurídicas a las cuales se refiere están bajo patria potestad del Poder Ejecutivo. Estudie ese punto, que le interesa.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar el artículo 34 del proyecto de ley.

— Resulta afirmativa de 54 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — Solicito reconsideración de los artículos 31 y 32 y voy a decir algunas palabras al respecto.

Yo había entregado ayer tarde en Secretaría dos agregados...

Sr. Presidente (Dri). — Se votaron y fueron rechazados, después de haber sido leídos por Secretaría.

Sr. Monjardin. — Los agregados por mí propuestos se han tratado en un instante en que estuve ausente, por lo que no pude dar las razones en que los fundaba. Es por ello que solicito la reconsideración, a efectos de que la Cámara se vuelva a pronunciar al respecto. No me hago mucha ilusión en cuanto al éxito de mi pedido, pero declaro, pese a las admoniciones que ayer nos hiciera el señor diputado Marotta y a la ira que estas cosas despertaron en el señor diputado de la Torre, que cuando hacemos estas peticiones y estas modificaciones nos mueve un serio propósito de perfeccionamiento de la ley, de colaboración seria.

Pido que en el artículo 31 se incorporen después de la palabra «industriales», las palabras «comerciales o entidades de cualquier orden».

Entiendo que este agregado suple una carencia de la ley. Al limitar la disposición a las entidades industriales se deja de considerar a otras, como, por ejemplo, las comerciales, las deportivas, las agrarias y las de cualquier otra índole que no están comprendidas en el término «industriales» y que, sin embargo, incurren en lo que se quiere evitar.

Con respecto al artículo 32, solicito se agregue después de «vigilancia» lo siguiente: «necesaria para impedir el vertimiento de líquidos residuales en las corrientes de agua».

Voy a dar el motivo por el cual solicito esta inclusión y la reconsideración del artículo. En una oportunidad —todavía es cosa que no está totalmente resuelta, según los informes que tengo—, nada menos que de los cuarteles de Campo de Mayo se vertían al río residuos cloacales, con grandes protestas de los vecindarios de la zona, que han elevado reclamaciones a los poderes públicos. Tengo entendido que hasta hace poco algunas estaban pendientes de solución en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires.

El agregado que propongo tiende a dar a Obras Sanitarias de la Nación la posibilidad de intervenir de manera eficaz ante cualquier institución que amparándose en su carácter oficial incurra en estas violaciones que afectan a los vecindarios.

En atención a que esto implica el deseo de completar la ley en cuanto sea posible, hago moción de reconsideración y solicito que sean votados los agregados.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cattáneo. — El señor diputado Monjardin se ha referido a los cuarteles de Campo de Mayo; pero debo decir que, en realidad, hay otros cuarteles en zonas pobladas, como es el caso, por ejemplo, de Resistencia.

En la ciudad de Resistencia todas las aguas servidas del cuartel pasan por una zanja que atraviesa la ciudad por lugares poblados, que es un foco de infección constante y permanente.

Por eso me parece muy bien la proposición que hace el señor diputado por Buenos Aires, pues considero que es fundamental para el gobierno nacional la obligación de poner en perfecto estado de salubridad sus propias instalaciones y no exigir solamente que lo estén las de carácter privado.

Sr. Vischi. — Hago indicación de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción del señor diputado por Tucumán de cerrar el debate.

— Resulta afirmativa de 58 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción de reconsideración de los artículos 31 y 32, formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta negativa de 55 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 35.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Este artículo se refiere a tarifas que percibe Administración de Obras Sanitarias por prestación de servicios. Las mismas fueron fijadas por decreto 25.687 del 26 de agosto de 1947, cobrándose de acuerdo con la categoría de los inmuebles.

Las tarifas son fijadas, por disposición de este artículo, directamente por Obras Sanitarias de la Nación y autorizadas por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, el último párrafo del artículo 35 dice: «Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo Nacional.»

Esta redacción es incompleta, primero: porque en la fijación de las tarifas no interviene una entidad que sería indispensable que expresara su opinión. Son los municipios.

En segundo lugar, es de absoluta justicia que las tarifas no sean únicas en todo el territorio de la República, y debemos permitir que intervengan en la fijación de las mismas los municipios, que tienen la responsabilidad directa de la afectación que cumplirán los pobladores.

Sr. Vischi. — ¿Y si los municipios no se ponen de acuerdo?

Sr. Illia. — Si vamos a legislar con el sentido de que dos entidades públicas, gobierno nacional y provincia, o provincia y municipio, puedan estar en desacuerdo en la interpretación de un texto legal, no vamos a dictar nunca una ley de carácter general.

Lo que propongo es que Obras Sanitarias de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional y municipio intervengan en la fijación de las tarifas, que se establecerán de acuerdo con la capacidad contributiva de la población.

Para llenar tal propósito, mociono concretamente que se sustituya la última parte del artículo 35 en la siguiente forma: «Las tarifas deben ajustarse a las características económicas de cada población y previo convenio con los municipios.»

Sr. Marotta. — El bloque no acepta la modificación.

Sr. Pasquini. — Hago moción de cerrar el debate.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

— Resulta afirmativa de 57 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar por partes el artículo 35.

Se va a votar el primer apartado, que no ha sido observado.

— Resulta afirmativa de 64 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar el segundo apartado del artículo 35.

— Resulta afirmativa de 59 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Uranga. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Acaba de producirse un nuevo caso de la extraña forma de discusión parlamentaria que señalamos en la sesión de ayer. Se formula un pedido de ampliación de un artículo, se exponen las razones, los miembros de la mayoría de la comisión no contestan una sola palabra y se cierra el debate.

Sr. Marotta. — No queremos hacerles el juego de perder el tiempo.

— Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Presidente (Dri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Es una falta de respeto que el señor diputado Marotta, que para fundar el

proyecto en nombre de la mayoría ha leído un discurso que dudo haya sido escrito por él, pues no ha dicho una sola palabra en la discusión en particular, se permita la impertinencia de manifestar que venimos a hacer el juego de perturbar el debate.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Uranga. — Lo que ha propuesto el señor diputado por Córdoba —y ruego a los señores diputados de la mayoría que no estaban atentos que reparen en la cuestión— es un pedido atinado y justo.

Sr. Marotta. — ¡Para ustedes puede ser; pero para nosotros, no!

Sr. Uranga. — ¡De este asunto usted no entiende nada! ¡Es mejor que no intervenga!

El señor diputado por Córdoba ha dicho una cosa muy concreta: que Obras Sanitarias podría fijar tarifas de fomento diferenciales para ayudar a la instalación de estos servicios en algunas localidades.

Sr. Marotta. — ¡Está en consideración el artículo 36!

Sr. Uranga. — ¡Estoy fundando un pedido de reconsideración! ¡Lea el reglamento de la Cámara!

La intervención de los municipios y las Obras Sanitarias servirá para que estas dos expresiones del Estado —municipal y nacional— discutan cuál es la genuina capacidad contributiva de esas localidades. Esto no es una novedad en la legislación argentina. Los ferrocarriles del Estado, en ciertas partes del país, aplican tarifas de fomento. Otros servicios, como el de las balsas automóviles que sirven algunas localidades como Embarcación, Barranqueras y Goya, tienen tarifas que, en relación al tonelaje y kilometraje, son más baratas que las que se aplican en los servicios que se prestan entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, por ejemplo, de tráfico más intenso.

El criterio de las tarifas para la ciudad de Buenos Aires no puede ser el mismo que el que se aplique a una modesta ciudad del interior del país. Ello es evidente, porque si bien es cierto que en Buenos Aires la prestación del servicio es más importante y es más grande el volumen de las instalaciones, la verdad es que el número de usuarios es muchísimo mayor, por lo que el rendimiento económico de la empresa es considerablemente más elevado que el de las ciudades del interior. No ocurre lo mismo en las pequeñas localidades donde la distribución de las viviendas se encuentra mucho más extendida, siendo por consiguiente mayores los gastos relacionados con la instalación de las redes, cámaras de servicios sanitarios, etcétera. Dichos gastos, por la considerable

extensión de las redes, no guardan proporción con el número de los usuarios del servicio. Así las cosas —sobre todo porque se ha dicho en reiteradas oportunidades—, no corresponde insistir en que se trata de un servicio destinado a asegurar condiciones de salud e higiene a todas las poblaciones del interior.

Hay ciudades que por una razón u otra se encuentran ubicadas en provincias de economía precaria, y sorprende que en esta Cámara —donde existen representantes de esas mismas provincias— no se atienda a la conveniencia de que se asegure un régimen de tasas más conveniente y más barato.

En tal sentido fundo la reconsideración para que se tenga en cuenta, siquiera sea en este solo caso, un pedido tan razonable y sensato como el que ha hecho el señor diputado por Córdoba.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción del señor diputado por Entre Ríos de reconsiderar el segundo apartado del artículo 35.

—Resultado negativo de 47 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Uranga. — Quedan notificadas todas las poblaciones del interior.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 36 del proyecto de ley.

—Se lee.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — A pesar de que el señor diputado Marotta, que es tan intemperante y áspero en sus desmedidas apreciaciones acerca de nuestra conducta, reitere la antiparlamentaria expresión de que perdemos el tiempo cuando hacemos observaciones que están inspiradas por el más serio deseo de bien público —lo que nos hace pensar que el señor diputado Marotta tiene muy limitado concepto del bien público y muy pobre pensamiento de la lealtad patriótica de todos los señores diputados—, voy a formular otras observaciones.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Monjardin. — No recojo, porque no las alcanzo a entender y acaso aunque las entendiera tampoco las recogería, algunas de las expresiones que se están soltando desde allí enfrente, porque una cosa es decir lo que se piensa y otra es soltar lo que se crea dentro del organismo. Todos me entienden.

Sr. Argaña. — El señor diputado padece del hígado.

Sr. Monjardin. — El artículo 36 implica una injusticia que debe ser salvada, aunque sólo sea con nuestra palabra.

En el artículo 26, ya aprobado, se establece que será obligatorio para todo inmueble comprendido dentro del área, etcétera, la instalación de cañerías para agua y para cloacas, aunque este inmueble no sea habitable, y establece lo mismo para cuando este inmueble inhabitable se destine a establo.

El artículo 35, que tiene íntima relación con el 26, dice que todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicios «aun cuando carezca de instalaciones domiciliarias» estará obligado —no comentaré esto del inmueble que está obligado— a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas, aunque este inmueble esté desocupado.

Reitero lo que dije ayer respecto de la imprecisión con que todo esto está redactado.

El artículo 36, que es el que ahora se considera, establece una verdadera arbitrariedad. Mientras los artículos anteriores obligan a los particulares propietarios de inmuebles habitables o no habitables, destinados a establo o a lo que se quiera, a abonar las tarifas, aun cuando no tengan las obras domiciliarias hechas, el artículo 36 establece para las propiedades de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, una excepción. Dice: «Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.»

Quiere decir, que se castiga a los propietarios y no se exige de los organismos de gobierno una retribución que es parte alicuota en las obras y no un impuesto.

Además, establece algo que creo que debe merecer la consideración de la Cámara. Dice: «Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos, con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.»

Entiendo que no puede establecerse tal rigidez; que debe haber tarifas diferenciales según los destinos. El riego es uno de los servicios públicos que prestan las municipalidades y puede ser que una tarifa de agua para riego en una municipalidad rica, resulte elevada en una municipalidad pobre. Creo que esta rigidez es inconveniente y sería mejor facultar al Poder Ejecutivo para que establezca tarifas diferenciales.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Concreto mi proposición en el sentido de suprimir la última parte del párrafo primero del artículo 36, que establece una excepción, a mi modo de ver perfectamente injusta, y que se agregue en la última parte, en reemplazo de «la tarifa uniforme», lo siguiente: «la tarifa dife-

rencial que establezca el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo con las necesidades del caso».

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano. — Hago moción de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa de 64 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 36 hasta la palabra «tarifas» inclusive.

—Resulta afirmativa de 69 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el segundo párrafo del primer apartado del artículo 36, cuya supresión propone el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa de 62 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar, el segundo párrafo del artículo 36.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Cattáneo. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cattáneo. — Yo pensaba decir estas pocas palabras antes de la moción de orden tan inconsulta sobre cierre del debate. Si están apresurados los señores diputados de la mayoría por terminar con esta ley, me parece que lo más conveniente es dejar expresar rápidamente los conceptos y no cerrar el debate, porque de esa manera ganaremos tiempo.

Voy a pedir reconsideración del artículo para que se acepten las dos modificaciones que han sido propuestas por el señor diputado por Buenos Aires, porque entiendo que son perfectamente justas.

Es imposible que este gobierno justicialista cobre a los particulares un impuesto sobre terrenos, y si son del gobierno no lo cobre; vale decir, que cuando un particular tiene un terreno sin servicio de Obras Sanitarias, se cobra impuesto, y cuando ese terreno es de propiedad del gobierno no se cobra. Esta preferencia es totalmente injusta.

Con respecto a la otra modificación, voy a citar, nuevamente, el caso especial de Resisten-

cia, donde ya he dicho que existe un cuartel y donde todas las aguas servidas son arrojadas por una zanja que se ha construido especialmente y que infecta a la población, máxime teniendo en cuenta el clima cálido que reina en Resistencia, como en todo el Norte del país.

Pero hay otra cosa con respecto a las tarifas uniformes para los casos de agua de riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos. Resistencia es una ciudad que en verano sufre un calor extraordinario y es parte integrante de la propia vida regar las calles constante y permanentemente. No es posible que una ciudad, por una circunstancia especial producida exclusivamente por el estado climático, deba tener un gasto mucho mayor que una ciudad que se encuentre en una zona de clima más benigno. Por eso, no es aceptable establecer una tarifa uniforme, porque si es uniforme resultará injusta. Yo creo que los señores diputados de la mayoría se han apresurado al no aceptar esta verdadera colaboración que presta el grupo parlamentario radical para que este proyecto alcance un sentido positivo y práctico; y considero un error no admitir en este despacho enmiendas justificadas, por el solo hecho de que el proyecto ha sido redactado por el bloque de la mayoría. Yo insisto en que deben salvarse no sólo los errores gramaticales, sino también de concepto que contiene el despacho.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — Yo no pensaba intervenir en este debate porque redactaron el despacho los miembros de la comisión que han sido asesorados por personal técnico de Obras Sanitarias. No obstante, creo necesario referirme a la observación que acabamos de oír.

Del análisis del artículo en discusión resulta que existen muy serios motivos para fijar el concepto que aparentemente, para la diputación radical, establece una diferenciación injusta. Existe una razón de fomento urbanístico. No es posible que los baldíos de las localidades urbanas en las que existen servicios sanitarios estén exentos del pago, porque esta tasa es para fomentar la edificación. Esta es, a mi juicio, la razón fundamental de esa diferencia.

Sr. Balbin. — Esa distinción puede incluirse en el régimen de las tarifas diferenciales.

Sr. Marotta. — El Poder Ejecutivo lo hará.

Sr. Tommasi. — Lo relacionado con la tarifa es una cuestión diferente. Lo que se paga en este caso es la conexión; el pago del servicio es otra cosa. Este aspecto está contemplado expresamente en el artículo que se discute.

Además, el señor diputado puede advertir que no se hace diferencia entre los organismos estatales —municipales, provinciales o nacionales—, que deben pagar el servicio de agua que utilicen para riego y barrido. El pago de esa tasa se explica porque las municipalidades la

cobran a su vez por la prestación del servicio, y entonces es lógico que si ellas utilizan los de Obras Sanitarias, contribuyan por su parte a costear esos servicios que por este artículo deben retribuir.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Velloso Colombres. — Yo entiendo, señor presidente, que el segundo apartado del artículo 35 aclara perfectamente el sentido del que se discute y que no es necesario dar mayores razones para sostener su redacción tal como lo ha propuesto la comisión. La segunda parte del artículo 35 dice que las tarifas serán iguales para todos los distritos, y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo; vale decir, que va de suyo que el Poder Ejecutivo habrá de establecer las diferencias en los casos que estime conveniente.

Sr. Cattáneo. — Pero el artículo 36 habla de «tarifa uniforme».

Sr. Velloso Colombres. — Tenga en cuenta el artículo 35 también, en el que se dispone que las tarifas podrán ser rebajadas por el Poder Ejecutivo.

Sr. Cattáneo. — Creo que debe borrarse la palabra «uniforme».

Sr. Astorgano. — Hago moción de cerrar el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cierre del debate sobre el pedido de reconsideración.

— Resulta afirmativa de 60 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por la Capital.

— Resulta negativa de 49 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 37.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — Hace un momento el señor diputado Tommasi tuvo la cortesía, realmente excepcional, y me complace destacarlo, de haber contestado, por primera vez en el curso de este debate, algunas de las observaciones que se han hecho desde nuestro sector. Merece ser destacado ese rasgo, sobre todo frente al silencio contumaz del señor presidente de la comisión, que es el que lógicamente debió haber dado una explicación.

En el artículo 37 del despacho se reitera la injusticia que hemos señalado con respecto al 36.

El artículo 37 hay que correlacionarlo con el 35, que establece que «todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aun cuando ca-

rezca de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas», y agrega: «Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.»

El artículo 37 reitera la excepción que, a mi modo de interpretar, es arbitraria —arbitraria por insuficientemente fundada—, de que los terrenos baldíos estarán exentos del pago de servicios de agua y de desagüe cloacales cuando carezcan de las conexiones respectivas. Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, igualmente estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial.

Sr. Tommasi. — Se trata de terrenos de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, que por lo general están destinados para obras públicas. Lógicamente, ni el Estado nacional o provincial, ni las municipalidades, van a tener en radios urbanos, donde existen servicios sanitarios, grandes baldíos sin finalidad alguna.

Sr. Monjardin. — Vuelvo a reiterar que me place que nuestras observaciones merezcan alguna réplica, aunque no comparta el punto de vista del señor diputado. A este respecto, lo invitaría a que recorriera los pueblos del interior, donde podrá advertir, como lo hemos podido apreciar muchos de nosotros, el profundo estado de abandono en que se encuentran muchos terrenos de propiedad municipal que podrían ser destinados a fines de utilidad pública, con lo cual se dificulta el progreso de las respectivas localidades por la falta de acción de las autoridades locales.

De manera que no se trata de casos excepcionales. Tengo alguna preocupación cariñosa por las cosas municipales, particularmente de mi provincia. En todo tiempo —no me refiero sólo al momento actual— he encontrado autoridades municipales que han olvidado, entre otras cosas, la obligación de fomentar el progreso de su zona, cuando en realidad debieran dar el ejemplo de su preocupación por los terrenos abandonados. Hay municipalidades que se desprecupan totalmente de sus propios terrenos.

De acuerdo con el texto que se desea aprobar, vamos a premiar el descuido. Creo que no debiéramos establecer excepciones de ese tipo, que van a causar un mal mayor que el que se desea evitar. Por otra parte, repugna al concepto que tengo de la justicia esta falta de equidad. Tal concepto podría traducirse en el viejo dicho criollo: «Ley pareja no es rigurosa.»

Las observaciones que venimos formulando son hechas con el deseo de que se mejore la redacción de la ley, pero nos encontramos ante un criterio cerrado, absurdo, que nos niega la

posibilidad de una generosa y leal colaboración.

Hemos dicho que en general hemos votado esta ley afirmativamente. Estamos haciendo observaciones a lo que consideramos insuficiente, desacertado, imprudente, y nos encontramos con que se mantiene un criterio estrechísimo, el mismo que el año pasado hizo que después de que los señores diputados Cooke y Benítez solicitaran una modificación a un artículo cuya absurdidad señalara el señor diputado Yadarola, en virtud de una argumentación un poco risueña y evidentemente intencionada hecha por el señor diputado Visca, se sancionara, creo que en la ley de creación del Ministerio de Salud Pública, el artículo 3º, por el cual se establecía que las personas pasan a ser patrimonio del Estado.

Nuevamente estamos ante ese criterio absurdo que sistemáticamente reiteran los señores diputados de la mayoría, que atenta así contra el bien público, porque a pesar de que nuestras observaciones son fundadas y justas, no tenemos la suerte de que se nos conteste siquiera. Con el argumento de que esto está bien hecho porque han intervenido en su redacción personas competentes, se nos quiere imponer la obligación de que lo aceptemos sin discusión y sin esclarecimiento alguno.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 37.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 38.

Sr. Pasquini. — Pido que se suprima la lectura del texto de los artículos; bastará con indicar los números respectivos.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — En el último apartado del artículo en discusión, se establece que «los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades».

Advierto, señor presidente, que por este camino vamos a terminar ocasionando un grave daño a la Administración General de Obras Sanitarias en lo que respecta a los recursos de que la ha dotado la propia ley para la atención de sus servicios específicos.

En el artículo 1º, inciso c) se establece que el importe de las multas y recargos que sean

de aplicación, de acuerdo con la presente ley, forman parte de su patrimonio.

Como este organismo necesita de esos recursos para la ampliación y mejoramiento de los servicios, considero que todo cuanto deba abonarse por ese concepto por parte de las municipalidades, las provincias y la Nación, debe serle res-petado.

Por tanto, propongo la supresión del último apartado del artículo 38 a fin de que no establezcamos un tratamiento desigual para los organismos del Estado y para los particulares, que, como se ha dicho muy bien, sentaría un precedente funesto y un mal ejemplo. Si el Estado no respeta lo que se ha establecido para el mejor servicio público, menos puede exigirse que los particulares sean puntuales en la atención de las obligaciones que la ley crea.

Sr. Presidente (Cámpora). — Corresponde votar por partes el artículo 38, ya que el señor diputado por Santiago del Estero propone la supresión del último apartado.

Se va a votar el primero y segundo apartado del artículo 38.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el tercer apartado del artículo 38.

— Resulta afirmativa de 69 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Este artículo tiene una directa relación con el problema de los privilegios, legislado en el Código Civil. Se trata, en consecuencia, de un importante y complejo asunto, respecto del cual recordará el señor diputado Casas Noblega que los tratadistas lo llaman la selva oscura del derecho civil.

Hace un instante, mi colega catamarqueño, y si no recuerdo mal ex alumno mío en la Universidad de Córdoba...

Sr. Casas Noblega. — Si cometí un error, es porque él me enseñó. (Risas.)

Sr. Yadarola. — ...creyó encontrarme en una gaffe jurídica, y le voy a demostrar que no ha habido tal error de mi parte, sin que esto importe afirmar que yo no sea capaz de cometer errores. Nadie podrá afirmar en esta Cámara, sobre todo los peronistas que me han tratado de cerca en la Comisión de Legislación General, que yo haya alardeado de sapiencia, como lo afirmaba inexactamente ayer el señor diputado de la Torre. Soy el hombre más modesto en materia de exteriorización de pensamientos, de ideas y de capacidad; me aplico aquel adagio de Sócrates: «Yo sólo sé que no sé nada», y con

esa guía marchó por el sendero de la vida, consagrando todas las horas que me sean posibles al estudio, para nutrir mi inteligencia y mi espíritu, pero sin alardear de sapiencia extraordinaria.

Le iba a decir al señor diputado que la gaffe —y lo lamento, no me complazco por cierto— la ha cometido él, que ha creído que cuando el Código Civil habla de que las personas por nacer pueden adquirir derechos, no consagra también el principio de que pueden contraer o asumir obligaciones. Está profundamente equivocado.

Sin alardes de *magister*, le voy a dar la prueba de su error leyendo la nota de Vélez Sárs-fiel al artículo 52 del Código Civil.

Sr. Colom. — Diga qué obligaciones pueden contraer. Dé ejemplos.

Sr. Yadarola. — Le voy a dar también un ejemplo.

Sr. Decker. — El señor diputado por Córdoba está fuera de la cuestión.

Sr. Yadarola. — Al señor diputado Colom, que tiene veleidades jurídicas, le interesa atender estas cosas.

Sr. Colom. — Pregunto si tiene algo que ver con el artículo en debate la cátedra de derecho civil que pretende darnos el profesor de quiebras Yadarola.

— Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Yadarola. — Le voy a leer para su información e ilustración, la nota del artículo 52 del Código Civil, según la cual la expresión «adquirir derechos», a más de comprender implícitamente la posibilidad de contraer obligaciones —contraer obligaciones, señor diputado Casas Noblega—, abraza en sí todas las fases de los derechos adquiridos, desde el hecho de la adquisición de cada uno de los derechos hasta el de su pérdida total. Voy a darle, además, el ejemplo concreto que me solicita el señor Colom, demostrativo de que las personas por nacer adquieren derechos y contraen obligaciones. Si el señor diputado Colom ha concebido un hijo y muere antes de que ese hijo nazca, ese hijo adquiera, no sólo los derechos, sino también todas las obligaciones que el señor diputado tiene con el IAPI. (Risas.)

Sr. Colom. — ¡A dónde ha ido a parar el señor diputado con su explicación: a un mal chiste!

Sr. Casas Noblega. — Si nace vivo...

Sr. Yadarola. — Claro está.

No escucho lo que dice el señor diputado Colom y por eso no le voy a contestar; pero voy a ahorrar la réplica al señor diputado Casas Noblega.

La exigencia de que nazca con vida es la condición que se pone para que esos derechos adquiridos se consoliden; pero es únicamente la

condición. La posibilidad de adquirirlos existe desde la concepción.

Paso ahora a ocuparme del artículo 39, según el cual el crédito correspondiente a las obras mencionadas, tendrá el privilegio establecido en el artículo 3931 del Código Civil. Se refiere al crédito de los constructores de obra. En esta parte la disposición está perfectamente bien concebida. Pero agrega: «el correspondiente al servicio y sus recargos tendrá el establecido en los artículos 3879, inciso 2º, y 3880, inciso 5º, del mismo código».

Estos dos artículos se refieren a la amplitud del privilegio que corresponde a los créditos impositivos. Según el artículo 3879, inciso 2º, tiene privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean bienes muebles o inmuebles. Advierto que los únicos privilegios generales que existen sobre los inmuebles son precisamente éstos, lo que excluye, desde luego, la necesidad de que en el inciso 5º se mantenga el principio de que el crédito de impuestos públicos tiene privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles. Ya está consagrado ese principio en el artículo 3879, inciso 2º.

No hago de esto cargo a los señores redactores del proyecto. Ellos se han concretado a copiar la norma del Código Civil. Pero indudablemente en este punto hay una repetición en el Código Civil, y quiero, simplemente, señalarla, sin que esto importe, repito, ni una crítica a Vélez Sársfield, ni tampoco a los que lo han copiado. Señalo el hecho.

El privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles, está ya consagrado en el artículo 3879, inciso 2º, y, por tanto, no hay necesidad de repetir, que es lo que hace el inciso 5º del artículo 3880, que los créditos del fisco tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles.

Esa era la observación que quería hacer, a efectos de que no se mantenga el error de creer que hay dos privilegios de distinta naturaleza en los artículos 3879 y 3880.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Casas Noblega. — Creo que el profesor de quiebras, doctor Yadarola, en este caso está en falencia jurídica, porque la nota del artículo 52 del Código Civil puede decir que la persona por nacer puede contraer obligaciones; le solicitaría para el caso un ejemplo; y le recomiendo leer la nota del artículo 71 del mismo código.

Pregunto al señor profesor Yadarola: la persona por nacer ¿puede contratar, puede vender, puede realizar cualquier acto jurídico que comprometa su patrimonio? No puede. Lo único que puede es adquirir derechos, como, por ejemplo, el de ser instituido heredero testamentario. Lo que el señor diputado sostiene con un argumento audaz es que si la persona nace muerta no hay ningún derecho; es lógico, porque todo queda sujeto a esa condición.

Sr. Mercader. — No hay obligaciones ni derechos.

—Varios señores diputados hablan a la vez y suena la campana.

Sr. Vischi. — Hago indicación de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cerrar el debate, que formula el señor diputado por Tucumán.

—Resultado afirmativa de 66 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 39.

—Resultado afirmativa de 68 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 40.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 70 votos; votan 72 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 41.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 69 votos; votan 92 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 42.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — En este artículo hay una disposición equivocada que nosotros, los hombres de provincias, no podemos aceptar en silencio.

El registro de la propiedad es una institución administrativa, cuya organización, atribuciones y funciones corresponden exclusivamente a la esfera provincial. No es posible que una ley nacional imponga a los registros de propiedad provinciales obligaciones y condiciones para el ejercicio y desempeño de sus funciones.

Este artículo es también demostrativo del desprecio con que el gobierno peronista trata a las provincias argentinas. A cada instante se acentúa la abolición del régimen federal y nosotros los representantes de provincias —sobre todo los que estamos convencidos de que el régimen argentino, por su historia, por su tradición y por la exigencia de su pueblo, debe ser federal— hacemos la salvedad y la necesaria defensa de nuestro régimen institucional.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 42.

—Resultado afirmativa de 64 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 43.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 44.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Voy a hacer una modestísima observación, a ver si la recoge la comisión.

El artículo 44 se refiere al cobro de las cuentas por vía de apremio, y en el segundo apartado se establece: «En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad intrínseca del título y falta de personalidad, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago.»

Puede darse el caso de que el ocupante del inmueble no sea el propietario y, en tal caso, al ser ejecutado, no tendría excepción que oponer, porque la relativa a falta de personalidad o personería no es adecuada al caso.

En el despacho anterior, previéndose esa situación, se había salvado en parte, aunque mal, esta deficiencia de la ley, dándose a la excepción de falta de personería un alcance que no tiene, pero que en cierta manera podría permitir a los jueces resolver el problema en alguna forma.

El despacho decía que la excepción de falta de pago se justifica con los recibos, y la de falta de personalidad, con documentos que acrediten que el ejecutado posee por cuenta ajena. Es decir, que el despacho anterior daba a la falta de personería un alcance que no tiene.

Sr. Marotta. — Fué suprimido.

Sr. Balbin. — Fué suprimido, exactamente.

Frente al ocupante, entonces, que no es propietario y es ejecutado, no tiene excepción ni defensa que oponer, porque no puede oponer la de pago ni la de falta de personería, ésta por no corresponder desde el punto de vista procesal.

Para salvar la deficiencia de la ley debe agregarse la única defensa posible para el ocupante que no es propietario: falta de acción.

En tal caso, el segundo párrafo del artículo 44 quedaría redactado en la siguiente forma: «En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad intrínseca del título, falta de personería y defensa de acción...», etcétera.

Sr. Marotta. — El bloque acepta la modificación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 44.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa de 81 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 45.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — En el artículo 45 hay unas palabras que me han hecho preguntarme en diálogo interior, qué significan; si se trata de un caso de conciencia o si es que no quiere suprimirse totalmente, aunque sea dejándola subsistir en la letra de algunas leyes, a la municipalidad de Buenos Aires.

La parte final del artículo hace una mención de ella. Me parece que las últimas palabras sobran, porque todos sabemos que ya no hay municipalidad en la ciudad de Buenos Aires.

¿Esas palabras son acaso un presagio de restauración, o reflejan quizá la inquietud que en la conciencia de los señores diputados produce el crimen político cometido al suprimirla?

Sr. Vischi. — No se ha suprimido la municipalidad.

Sr. Monjardin. — Tal vez se dejen esas palabras por si alguna vez la conciencia es tan fuerte que los impulse a restaurarla. Mientras eso no acontezca, la municipalidad de Buenos Aires no existe. Si no existe, no hay razón para que subsistan esas palabras que implican una inexactitud y una falsedad legal.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 46.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 65 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 47.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 65 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 48.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Las proposiciones hechas con anterioridad en el curso de este debate, pretendiendo que se modificaran algunos artículos a fin de dar mayor libertad financiera a Obras Sanitarias, tenían como objetivo fundamental

el de que una vez construídas las obras en los municipios —tanto de provisión de agua cuanto de desagües—, ellas pudieron pasar automáticamente a ser administradas por las autoridades municipales.

En este artículo se establece el régimen de rescate de las obras por los municipios, que deben reintegrar el costo total de la inversión.

Muy pocas veces un municipio puede hacerse cargo de esta clase de servicios. Al afirmar el régimen municipal pretendemos que los municipios tengan auténtica autonomía financiera, económica y política, porque consideramos que es la única manera de cimentar el régimen democrático en el país.

Al no prosperar las modificaciones de artículos anteriores, ya resulta imposible modificar el que estamos tratando, pero quiero reiterar, aunque sea en forma breve, cuál es el concepto de esta bancada con respecto a la importancia trascendente que concedemos a la autonomía municipal, que defenderemos siempre, y en todo terreno.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 48.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 49.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 50.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 51.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Antes de hacer uso de la palabra solicito que se dé lectura de la modificación que he propuesto al artículo 51.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado por Córdoba propone redactar el artículo 51 en la siguiente forma:

En las localidades de escasa población o carente de capacidad contributiva se instalarán servicios de provisión de agua potable domiciliarios o a base de surtidores públicos, gratuitamente, fijándose para tal objeto un porcentaje mínimo del 15 % en los planes anuales de inversiones.

Sr. Illia. — El artículo que consideramos fija los casos en los cuales Obras Sanitarias cons-

truirá obras en forma gratuita. De acuerdo con la redacción del artículo, son excepcionales los casos en que esta repartición procederá así, por lo que quiero ampliar dicha facultad.

Ayer, cuando se consideró la partida global de \$ 200.000.000, propuse que se destinara el 25 % para obras de esta naturaleza. Creyendo que los señores diputados de la mayoría consideraron excesiva esta proporción, trato de que en este artículo se destine el 15 por ciento en los planes anuales para estas obras de fomento; y no sólo que se instalen servicios de provisión de agua por medio de surtidores públicos, sino que también se efectúen obras domiciliarias cuando la población tiene relativa importancia y las exige.

Advierto que propongo esta modificación, como otras, con el mejor sentido de servir intereses primordiales de la mayor parte de las poblaciones del interior. Son miles las que necesitan estos servicios. Se facultaría así a Obras Sanitarias de la Nación para que paulatinamente vaya dando tan anheladas soluciones.

Sr. Cané. — Si me permite el señor diputado...

Con todo respeto le pido al señor diputado me explique cómo concilia ese concepto reiteradamente expresado por el señor diputado y por otros en favor de la autonomía de las municipalidades —cuya defensa nosotros no abandonamos—, con este otro de mayor inversión, de fondos en obras de fomento, en los municipios. O la municipalidad tiene autonomía y debe costear las obras, o la municipalidad necesita de los dineros de la Nación para estas obras de fomento.

Sr. Illia. — Creo honestamente, que no existe contradicción entre el concepto de autonomía municipal expuesto anteriormente y el propósito de que Obras Sanitarias de la Nación construya las obras necesarias que pasarán después al municipio.

De acuerdo con lo que expresa el señor diputado, el municipio, por su cuenta, con sus finanzas, debería construir estas obras, que nosotros por esta ley, concedemos a Obras Sanitarias, que es la repartición técnica cuya existencia es necesaria en el país, para que vaya resolviendo estos problemas que demandan erogaciones que no pueden afrontar las municipalidades. Después que Obras Sanitarias de la Nación haya construído las obras, es lógico que los municipios tengan en general una capacidad para administrarlas.

Sr. Cané. — Me parece que vamos a entendernos mejor si concreto un ejemplo. Me refiero a un municipio, como el de mi pueblo, que tiene el orgullo de ser uno de los primeros del país con aguas corrientes municipales, desde 1900. Es necesario ampliar las instalaciones y,

contará con esta ley que facilita la entrega de ese servicio a la provincia o a la Nación para poder satisfacer una exigencia de la civilización. Esto quiere decir que no es posible conciliar las dos cosas. La autonomía del municipio no le permite hacer esta clase de instalaciones; en todo caso, podrá administrarlas simplemente pero no hacer las instalaciones.

Sr. Illia. — Para terminar esta amable discusión con el señor diputado Cané, debo advertirle que no participo de su manera de pensar y no solamente porque hayamos formado concepto en la discusión de esta ley, sino porque creemos que las provincias y los municipios deben realizar el mayor esfuerzo técnico y económico, para resolver todos sus problemas sin necesidad de auxilio de la Nación. Debo manifestarle que en la provincia de Córdoba, cuando fué gobernada por el radicalismo, se creó un organismo que tuvo trascendental importancia: la Dirección de Hidráulica, y se construyeron obras de gran magnitud, tres diques simultáneamente, lo que jamás se había realizado en el país y fueron salvadas las dificultades técnicas y financieras.

Sr. Lucini. — El dique Cruz del Eje fué hecho en un lugar...

Sr. Illia. — No le permito interrupciones al señor diputado. Rodríguez Araya lo está acusando al señor diputado.

Se construyeron simultáneamente esos tres diques y nosotros proyectamos crear una repartición técnica con las mismas características que Obras Sanitarias de la Nación, dependiente de esa misma Dirección de Hidráulica, con el objeto de que juntamente con las autoridades municipales, encararan las realizaciones pertinentes.

Como ve el señor diputado, las provincias y los municipios pueden realizar obras que parecerían reservadas exclusivamente al gobierno de la Nación. Pero es más fácil dejar que el gobierno nacional lo resuelva todo —cuando lo resuelve— y de esa manera se va entregando poco a poco el patrimonio provincial y municipal, se va perdiendo autonomía y jerarquía políticas y llegamos a este sistema centralista al cual nosotros combatimos.

Por otra parte, y concretándose al artículo 48, planteo el problema de la mayor parte de las provincias argentinas cuyas poblaciones en gran número carecen de este servicio indispensable y que no tienen capacidad económica y técnica para resolverlo. Entonces yo pedía que Obras Sanitarias de la Nación destinara un porcentaje de sus planes anuales de inversión para satisfacer estas apremiantes necesidades. Ese era el objetivo del artículo que había redactado.

Sr. Visca. — Hago moción de orden de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta afirmativa de 59 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 51.

— Resulta afirmativa de 65 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires. Se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado por Buenos Aires propone agregar al final del primer apartado...

Sr. Monjardin. — Yo no he podido fundar eso, y deseo dar las razones, pero si el señor presidente no me concede la palabra, no puedo hacerlo.

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado no puede prejuzgar si la Presidencia le concederá o no la palabra. El señor diputado ha pedido la palabra para una moción de reconsideración, y para ese objeto la Presidencia se la concede.

Sr. Monjardin. — No quise hacer en este momento un cargo al señor presidente, sino señalar que con estas mociones de cierre del debate, lo único que se logra es prolongarlo, porque nos obliga a usar el procedimiento reglamentario de pedir reconsideración para fundar algunas proposiciones que consideramos útiles.

He propuesto que a este artículo se agregue algo que considero muy importante.

En el artículo 51 se considera solamente la provisión de agua potable para aquellas localidades que por su escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas —destaco estos dos últimos conceptos, «falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas»— resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario.

El problema de la provisión de agua potable, de servicios cloacales y los conexos, implica un grave problema económico y financiero, pero también es cierto que lo fundamental en este proyecto de ley es satisfacer una necesidad sanitaria. Por este artículo se contempla la provisión de agua potable en localidades que por su escasa posibilidad económica no podrán pagarlas o proveerlas, como acaba de señalarlo el señor diputado Cané con muy buen recuerdo de lo que se hizo en Lincoln, porque constituye un ejemplo de lo que pueden los municipios. Entiendo que a esto deben agregarse otros servicios. En algunas partes del mundo hay servicios sanitarios de otro orden, como son letrinas y baños públicos. No voy a entrar a una mención detallada porque sería hacer una exposición demasiado larga.

Sr. Velloso Colombres. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Monjardin. — Con mucho gusto.

Sr. Velloso Colombres. — Nosotros debemos partir de la premisa siguiente: ¿cuáles son las posibilidades del Estado para arbitrar soluciones a todos esos problemas? Son limitadas, son precarias. Luego se llegará, dentro de algún tiempo, a la realización de lo que el señor diputado propone, y mientras tanto, el esfuerzo debe ser destinado a los mayores núcleos de población. Cuando las posibilidades financieras del Estado lo permitan, entonces podrán ser encarados esos otros servicios que el señor diputado enuncia. Son también problemas de higiene a los que alguna vez el Estado hará frente.

Sr. Monjardin. — Me complace que el señor diputado coincida con la intención que me mueve a proponer el agregado.

Creo que si Obras Sanitarias de la Nación lleva un servicio elemental de agua a una modesta aldea de nuestras provincias o de nuestros territorios, podría igualmente llevar ese doble servicio civilizador de letrinas y de baños, cuyo costo es reducido. Con eso se llevaría el conocimiento de procedimientos sanitarios, hoy en desuso o desconocidos por buena parte de nuestras alejadas poblaciones rurales. Todos los señores diputados, y en particular los que son médicos, saben cuántas enfermedades se adquieren en nuestro país por la carencia de esos dos elementales instrumentos de civilización.

Sr. Velloso Colombres. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Monjardin. — Con mucho gusto.

Sr. Velloso Colombres. — Es justo lo que acaba de decir el señor diputado por Buenos Aires, pero ante esa proposición para que Obras Sanitarias lleve a un pueblo de poca importancia el agua potable y los demás servicios que concurren al mantenimiento de una higiene perfecta, yo le diría esto: que en vez de llevar esos agregados de la higiene a un pueblo pequeño, lleváramos agua a otros pueblos que carezcan de ella, pues de lo contrario a un pueblo chico le llevaríamos agua y también instalaciones sanitarias, y a otros pueblos los dejaríamos sin provisión de tan esencial elemento. Mientras se cumpla el proceso, llevemos primero agua a todos los pueblos.

Sr. Monjardin. — Acaso, señor diputado, hubo insuficiente precisión en lo que he dicho, porque parecería, por la réplica tan acertada que ha hecho el señor diputado, que me he referido a la totalidad de las obras sanitarias, y no es así.

Yo me refería a un pequeño servicio público. En algunas localidades de Europa y también algunas veces en nuestro país, ha habido elementales baños o letrinas públicos, de los que se podía hacer uso mediante una reglamentación establecida por las autoridades correspondientes, y un pequeño estipendio.

Yo propondría un agregado que contemplara la posibilidad de que en esas aldeas remotas, al

hacer instalaciones Obras Sanitarias, también realizara instalaciones complementarias del tipo de las que señalo, con lo cual se llevaría la civilización a esos lugares; se fomentaría el hábito de la higiene y además sería un signo de cultura evidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración del señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta negativa de 42 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 52.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 57 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 53.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — El artículo 53 dice lo siguiente: «Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública.»

Voy a proponer la modificación de este artículo, a cuyo efecto entregaré a la Secretaría un agregado que entiendo va a complementar el ordenamiento del mismo en todos sus aspectos.

Creo, señor presidente, que una de las obligaciones fundamentales de Obras Sanitarias de la Nación al hacer el planteamiento de los estudios y realización de obras, deberá ser siempre la de consultar a las provincias o municipios en todos los casos. Bien sabemos que cada una de las provincias o municipios confecciona planes de estudio o realiza obras que de uno u otro modo tienen siempre estrecha relación con aquellos estudios, y no es posible que dicha repartición, al margen del espíritu de progreso que puede animar a cada una de esas provincias o municipios, pretenda realizar planes consultando únicamente al Ministerio de Salud Pública.

Yo entiendo que las primeras que deben ser consultadas son las provincias y las municipalidades. De ese modo se evitará la superposición de planes y se logrará una mayor armonía en los trabajos. Conviene señalar que los ingenieros, técnicos y especializados de las provincias o municipios tienen un conocimiento pleno de los problemas regionales y pueden ofrecer verdaderas soluciones, tanto en el planteamiento como en la realización de obras de sa-

neamiento, desagües pluviales, pavimentación, etcétera, evitando inversiones onerosas e inútiles.

Por las razones expuestas, voy a solicitar la modificación del artículo 53.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se votará por partes.

Se va a votar la primera parte del artículo, hasta las palabras «...a cuyo efecto...», inclusive.

— Resulta afirmativa de 63 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el resto del artículo 53, tal cual figura en el despacho aprobado por la Cámara en comisión.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 54.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Rabanal. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — Solicito que por Secretaría se dé lectura a un nuevo artículo que propongo, a continuación del número 54.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo nuevo propuesto por el señor diputado por la Capital, que, de ser aprobado, llevaría el número 55.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así: «La administración general de Obras Sanitarias de la Nación construirá en la ciudad de Buenos Aires y en los principales centros poblados de provincias y territorios, una red especial para el suministro de agua destinada exclusivamente al riego de parques, plazas y jardines públicos, lavado de calles y servicios de incendio.»

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — No es ésta una cuestión que escape al conocimiento de los señores diputados. Con frecuencia en la Capital Federal y en las ciudades más importantes de la República, sobre todo en la temporada estival, el problema de la escasez de agua se actualiza en forma alarmante. A pesar de la buena voluntad de Obras Sanitarias de la Nación, este problema no ha podido ser resuelto en la forma deseada en modo especial por los habitantes de la Capital Federal y zonas limítrofes, debido a los múltiples inconvenientes surgidos en la realización de los planes de suministro de agua que deben llevarse a cabo.

En la Capital Federal esta cuestión se viene agudizando desde hace muchos años. Recordaré que los primeros planes para el suministro de agua al radio antiguo, que establecían una producción mínima de agua potable de cuatro mil litros por segundo, siguen los que a partir de 1912 contemplan el problema de la incorporación definitiva de las 16.000 hectáreas restantes del nuevo radio de la ciudad, perímetro al cual debía prestar los nuevos servicios Obras Sanitarias de la Nación. Con los nuevos métodos de producción de agua incorporados por este organismo, el promedio disponible se elevó a nueve mil litros por segundo. No obstante ello, el extraordinario crecimiento de la Capital Federal y sus alrededores hizo que en un momento determinado el consumo de agua por la población adquiriera proporciones inusitadas. Llegamos a comprobar entonces cómo, con un registro de consumo diario de agua de cerca de 1.400.000 metros cúbicos —lo que representa aproximadamente un promedio de 500 litros por habitante—, en muchos meses del año y en determinadas zonas de la Capital Federal y de los municipios limítrofes se registra la carencia de la cantidad necesaria de ese precioso líquido para satisfacer sus más elementales necesidades.

Sr. Velloso Colombres. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Rabanal. — Sí, señor diputado.

Sr. Velloso Colombres. — Pediría al señor diputado que en lugar de proponer se incremente el volumen de agua destinada al riego, proponga que se aumente el que se destina al consumo de la población.

Sr. Rabanal. — Al concretar este asunto el señor diputado me dará la razón. Estoy seguro.

Sr. Velloso Colombres. — Obras Sanitarias está trabajando con inteligencia y con patriotismo para que la población pueda disponer de agua en la cantidad necesaria especialmente para sus necesidades esenciales.

Sr. Rabanal. — Voy a explicar la finalidad que guía al sector radical al proponer, por mi intermedio, este artículo nuevo. Existen en otros países antecedentes en igual sentido, que reflejan fielmente la permanente preocupación de sus gobiernos por la solución integral de este problema.

Los extraordinarios volúmenes de agua utilizada en las más importantes ciudades de nuestro país para el riego de espacios verdes, lavado de calles pavimentadas y riego de calles de tierra, y la que se destina a combatir los grandes siniestros, hace necesario que Obras Sanitarias, se aboque a la construcción de instalaciones especiales, destinadas a la provisión de agua, que con una reglamentación adecuada, cumplirá ampliamente los fines que persigue esta iniciativa.

Nosotros creemos que es conveniente que se incorporen definitivamente a las actividades

específicas, que a través de esta ley orgánica deberá desarrollar Obras Sanitarias de la Nación, este nuevo aspecto de su tarea, tanto en lo que se relaciona, repito, con el riego de parques, plazas y jardines, como con el lavado de calles y servicio de incendios, servicios que sería factible prestarlos con un tipo de agua que podría ser tomado a muy bajo costo directamente del río de la Plata, en el caso de la Capital y alrededores.

No hay razón de ninguna naturaleza que justifique el derroche inútil de millones de litros de agua potable en riego de plazas y jardines, lavado de calles y servicio de incendios. En ese sentido, y mediante un plan progresivo, Obras Sanitarias puede promover la utilización de un tipo de agua especial que, con alguna clarificación, llenara acabadamente el cumplimiento de los fines que persigue este nuevo artículo. El agua será lógicamente de un costo muy inferior de la destinada al consumo diario de la población y evitará que se repita el problema que estoy señalando, de la gran escasez en la época de fuertes calores.

Informo a la Honorable Cámara que la nueva planta a construirse en Bernal, para dotar de agua a las zonas de la línea hasta Almirante Brown, ha de demandar aun más de cinco años, y los equipos de bombeos que se han encargado a Suecia, no creo que puedan ser incorporados antes de mucho tiempo al servicio activo del suministro de agua al aglomerado bonaerense.

Se me ocurre que desde ese punto de vista tenemos la obligación de adoptar las medidas preventivas necesarias. Además, con ello no hacemos más que incorporar definitivamente a la legislación de nuestro país soluciones al problema del suministro de agua, que han sido aceptadas ya en forma definitiva por otros países que marchan a la vanguardia en esta materia. Esa circunstancia hace que nuestro sector insista en la necesidad de que se incorpore este nuevo artículo a la ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano. — Que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa de 69 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado por la Capital.

— Resulta negativa de 57 votos; votan 92 señores diputados.

Sr. Cattáneo. — Pido la palabra para formular una moción de reconsideración del artículo que se acaba de votar negativamente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cattáneo. — Lamento, sinceramente, la táctica que ha adoptado el bloque mayoritario de cerrar el debate, porque ello nos obliga a adoptar el procedimiento reglamentario de solicitar reconsideración.

Yo había pedido la palabra en el preciso instante que terminó su discurso el señor diputado Rabanal, pero se formuló inmediatamente una inconsciente moción de orden, hecha por el vicecampeón de las mociones de orden. (Risas.)

Creo que la red de agua que propone el señor diputado por la Capital es necesaria por muchas circunstancias y razones, no sólo por lo que se ha dicho, sino por otro motivo fundamental.

Hemos presentado con el señor diputado Illia un proyecto de organización del cuerpo de bomberos, a raíz del último y pavoroso incendio de La Algodonera. En ese siniestro se ha comprobado que, no obstante haberse producido en un momento de poco consumo, el agua en la Capital es totalmente escasa; tan reducida es, que en ciertos instantes ni siquiera ha permitido apagar focos insignificantes, por poca presión y por muchos otros factores técnicos.

Es necesario crear una nueva red para ese servicio fundamental, no sólo para tiempos de paz sino también para momentos de guerra. Hay que pensar en la defensa de la ciudad. Si en estos momentos se produjeran tres incendios simultáneos en la Capital, más o menos grandes, existe la seguridad absoluta de que dos, por lo menos, no podrían ser extinguidos por falta de agua. De manera que el problema es más serio de lo que se imagina.

Creo, señor presidente, que no basta resolver el problema de las obras sanitarias en esta forma rápida, sin mayor análisis. Es necesario que se haga una ley que satisfaga todas las necesidades de la población que tengan relación o sean afines.

Es necesario que el bloque de la mayoría tenga presente que el bloque de la minoría trata siempre de cooperar en forma constructiva, y que, cuando no le conviene nuestra intervención, el bloque de la mayoría dice que el bloque minoritario no coopera y hace oposición sistemática, y con mociones de orden cierran el debate para impedir nuestras exposiciones. Es curiosa la dualidad de criterio del bloque mayoritario. Pareciera que existe en este asunto una orden terminante, que no sé de dónde viene ni quién la ha dado, de que este proyecto tiene que votarse tal cual está, no obstante todos los disparates garrafales que contiene.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta negativa de 60 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 55.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 56.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 69 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 57.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 69 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 58.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 70 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 59.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Este artículo puede aclararse con un simple agregado, o, tal vez, con una explicación de la comisión.

El artículo 59 establece para las provincias y municipalidades la obligación de entregar, libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que sean necesarios para las obras. Va de suyo que la obligación de las provincias y las municipalidades debe hacerse efectiva únicamente en los casos en que medie el acogimiento de las provincias, por imperio del artículo 10. Cuando el artículo 10 se cumple, es decir, que la provincia se acoge al beneficio de esta ley, aparece la obligación por parte de las provincias y las municipalidades de entregar, sin cargo alguno, los terrenos y las fuentes de producción de agua.

Se me ocurre que el artículo podría estar redactado de esta manera: «en el caso de acogimiento conforme al artículo 10, las provincias y municipalidades, etcétera».

De lo contrario, habrá que aclarar perfectamente que la provincia que no esté acogida por la mecánica del artículo 10, no está obligada a entregar sin cargo terrenos o fuentes de provisión de agua.

Sr. Cané. — Perdonará el señor diputado si en el orden legal no estoy perfectamente ubicado

en esta cuestión, porque no conozco derecho. Pero se me ocurre que habiéndose ya estipulado en el artículo 10 la condición indispensable para que se hagan las obras, no haría falta la explicación posterior.

Después de este cambio de opiniones y sugerencias la interpretación de la ley va a resultar mucho más fácil.

De todos modos no creo que haya inconveniente; y el presidente de la comisión termina de aceptar su proposición y la votaremos, con lo cual estamos desmintiendo las categóricas y reiteradas afirmaciones hechas hoy por algunos diputados de la minoría de que la mayoría se cierra en una actitud de obstrucción a toda posibilidad de colaboración de la minoría.

Sr. Balbin. — Al expresar mis palabras dije que este artículo podría aclararse con un simple agregado, o bien podría la discusión realizada y el informe de los miembros de la comisión servir de fuente de interpretación de la ley, que es indispensable para casos como éste, en que se establece la obligación para las provincias y municipalidades de entregar sin cargo ni gravamen alguno, todos los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan.

Si la comisión no aceptara el agregado, que me parece indispensable dentro del artículo, quedaría entendido que la obligación de las provincias es para el caso en que hubiera mediado el acogimiento que establece el artículo 10. Pero siendo el criterio de la comisión y la finalidad de la ley que la entrega de terrenos y fuentes de provisión de agua se haga en el caso que las provincias se acojan al régimen que estamos sancionando, podría establecerse con toda claridad mediante este agregado: «En el caso de acogimiento conforme al artículo 10», siguiendo luego el artículo como está.

Sr. Cané. — Creo que no hay ningún inconveniente en aceptar el agregado que propone el señor diputado, con lo cual hacemos un desmentido a las reiteradas afirmaciones que vienen del bloque de la minoría en el sentido de que nos cerramos, excluyendo toda posibilidad de colaboración. ¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. Cattáneo. — Será una excepción gratísima.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 59.

—Resulta afirmativa de 73 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado que propone el señor diputado Balbin, al comenzar el artículo 59, consistente en las palabras: «En el caso de acogimiento de acuerdo al artículo 10.»

—Resulta afirmativa de 66 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 60.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 61.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Por este artículo se establece el criterio a seguir para la fijación del precio que la Nación abonará por la adquisición de empresas particulares, en previsión de que, por concesiones poco previsoras, la compra de esas instalaciones resultara onerosa para la Nación.

En el párrafo cuarto hay una redacción un poco obscura y bastaría hacerle un agregado para que quedara claramente establecido el concepto. Dice el artículo: «Entiéndase por valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias», con lo cual no se fija con precisión el objeto que se persigue, por lo que yo aconsejo un agregado para que el artículo quedara así: «Entiéndese por valor físico de utilización el valor físico de origen de las instalaciones», etcétera.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo tal como está en el texto adoptado como despacho por la Cámara en comisión.

—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a leer por Secretaría el agregado propuesto por el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — De acuerdo con la proposición del señor diputado por Santiago del Estero, la redacción del penúltimo párrafo del artículo 61 comenzaría así: «Entiéndese por valor físico de utilización el valor físico de origen...»

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la modificación propuesta por el señor diputado por Santiago del Estero.

—Resulta afirmativa de 58 votos; votan 92 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 62.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 50 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 63.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 58 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 64.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 68 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 65.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 69 votos; votan 88 señores diputados.

—El artículo 66 es de forma.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Sr. Miel Asquía. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago moción de pasar a cuarto intermedio hasta las 15.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital de pasar a cuarto intermedio hasta las 15.

—Resulta afirmativa de 73 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 13 y 15.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 3784.